EXPEDIENTE: 2023/OIC/PRA001

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

SENTENCIA DEFINITIVA

Chihuahua, Chihuahua, once de mayo de dos mil veintitrés.

Sentencia que resuelve en definitiva el procedimiento de responsabilidad administrativa número **2023/OIC/PRA001**, instruido en contra del ciudadano **JULIÁN RICARDO LUJÁN LARA.**

GLOSARIO

Ley General	Ley General de Responsabilidades Administrativas
Código de Ética	Código de Ética y Conducta de las Personas Servidoras Públicas del Municipio de Chihuahua
Constitución Federal	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
IMPE	Instituto Municipal de Pensiones
IPRA	Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa
OIC	Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua
PRA	Procedimiento de Responsabilidad Administrativa

1. ANTECEDENTES DEL CASO

1.1. Denuncia. El veinte de julio de dos mil veintidós se recibió por parte de la autoridad investigadora escrito de denuncia presentado por el [redacted]

EXPEDIENTE: 2023/OIC/PRA001

[redacted] en contra de **JULIAN RICARDO LUJÁN LARA** por hechos acontecidos el dieciocho de julio de dos mil veintidós.

1.2. Radicación. El veinte de julio de dos mil veintidós se dictó acuerdo de radicación por parte del titular del área investigadora del OIC, a través del cual se ordenó iniciar con la investigación correspondiente bajo el número 2022/OIC/DE481.

1.3. Calificación de conducta. El doce de diciembre de dos mil veintidós, la autoridad investigadora consideró que el expediente se encontraba debidamente integrado y que no existían actos o diligencias pendientes por desahogar, por lo que calificó la falta administrativa como no grave.

1.4. IPRA. El dieciséis de enero de dos mil veintitrés la Autoridad Investigadora elaboró IPRA, el cual se recibió en esta Área de Responsabilidades el veinticuatro de enero de dos mil veintitrés mediante oficio número **OIC/AI/0030/2023**, signado por el Titular del Área Investigadora del OIC, al que acompañó el expediente de investigación número **2022/OIC/DE481**, integrado por ochenta fojas.

1.5. Admisión. El veinticuatro de enero de dos mil veintitrés se radicó el IPRA, registrándose el expediente ante esta Área de Responsabilidades con el número **2023/OIC/PRA001,** mientras que el día veinticinco de enero se dictó Acuerdo de admisión en el que se ordenó emplazar al presunto responsable.

1.6. Emplazamiento. El día ocho de febrero de dos mil veintitrés mediante cédula de notificación personal se emplazó al C. JULIÁN RICARDO LUJÁN LARA al procedimiento de responsabilidad administrativa, diligencia realizada dentro de las

instalaciones del Centro de Readaptación Social número uno, derivado de acuerdo dictado el siete de febrero de dos mil veintitrés.

1.7. Audiencia inicial. La audiencia inicial fue celebrada en las instalaciones del Centro de Readaptación Social número uno, a las doce horas del día veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, en la cual se tuvo a las partes asistentes realizando las manifestaciones que consideraron pertinentes y por autorizado como defensor del presunto responsable [redacted] en términos amplios que señala el artículo 117 de la Ley General.

1.8. Admisión y desahogo de pruebas. Por acuerdo del día catorce de marzo de dos mil veintitrés se tuvieron por admitidas y desahogadas las pruebas documentales ofrecidas por la autoridad investigadora, y se hizo constar que la persona presunta responsable no aportó ni por si, ni por conducto de su representante legal prueba alguna de su parte.

1.9. Alegatos. El día veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, se declaró abierto el periodo de alegatos concediendo un plazo de cinco días hábiles comunes para las partes, atendiendo a que no existían diligencias pendientes para mejor proveer o más pruebas que desahogar.

1.10. Cierre de instrucción. El doce de abril se dictó acuerdo a través del cual se tuvo por precluido el derecho de las partes para formular alegatos, se decretó el cierre de la instrucción y se turnaron los autos del expediente para la elaboración de resolución, la cual se emita con base en las siguientes:

C O N S I D E R A C I O N E S

EXPEDIENTE: 2023/OIC/PRA001

PRIMERO. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.

Esta Área de Responsabilidades, es competente para conocer y resolver el presente PRA, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 14, primer párrafo, 16, primer párrafo, 109, fracción III, párrafos primero, segundo y sexto de la Constitución Federal; 178, fracción III, párrafos primero y tercero de la Constitución Política del Estado de Chihuahua; 1, 3, fracción IV, IX y XV, 9, fracción II, 10, párrafo segundo, 111, 118, 130, 131, 133, 135, 200, 202 fracción V, 203, 204, 205, 206, 207 y 208, fracción X de la Ley General; artículos 28, fracción X, 100, fracción XXXIII, 101, fracción III, y 101, bis fracción III, numerales 1, 4 y 20 del Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua, así como por lo previsto en el artículo 44 de los Lineamientos que Regulan el Procedimiento de Responsabilidades Administrativas ante el Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua, toda vez que el mismo versa sobre una conducta infractora que no está catalogada como grave.

SEGUNDO. TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y DEBIDO PROCESO

Para este análisis debemos tomar como punto de partida el artículo 17 de la Constitución Federal el cual eleva a rango constitucional la tutela judicial efectiva que supone, en primer término, el acceso a la jurisdicción, es decir, que los particulares pueden ser parte en un proceso y, en segundo, el derecho que éstos tienen a obtener una sentencia sobre el fondo de la cuestión planteada y su cabal ejecución, la que deberá ser pronta, completa e imparcial.

Al respecto, es necesario precisar que los derechos que conforman la tutela jurisdiccional efectiva alcanzan no solamente a los procesos ventilados ante jueces y tribunales pertenecientes al Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones.

Además, este derecho fundamental se encuentra íntimamente relacionado con el contenido en el artículo 14 de la Constitución Federal, en el que está previsto el derecho al debido proceso y, en particular, el derecho de audiencia, al prever que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

A su vez, el artículo 16, párrafo primero, de la propia Constitución, establece el principio de legalidad, que implica que ningún acto de molestia puede realizarse, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento, por lo que a través del derecho al debido proceso se busca confirmar la legalidad y correcta aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad humana en cualquier tipo de proceso, que se deben realizar de acuerdo con reglas preestablecidas, a las que se les conoce como formalidades esenciales del procedimiento.

Sobre el tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 47/95 expone claramente los elementos que integran el concepto de "formalidades esenciales del procedimiento":

> **"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO".** La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera

> genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado".

Así las cosas, la primera formalidad esencial de todo procedimiento es que la parte afectada sea llamada ante el órgano de autoridad a fin de que pueda defenderse correctamente; el ser llamado no solamente comprende la posibilidad de que el particular sea emplazado de que existe un procedimiento que pudiera culminar con la emisión de un acto privativo, sino que -de forma más amplia- exige poner a su disposición todos los elementos que le permitan tener una noticia completa del hecho que se le imputa.

Entonces, la finalidad de ser emplazado estriba precisamente en la oportunidad de ofrecer pruebas y de que éstas sean desahogadas. De igual modo, el particular debe tener el derecho de ofrecer alegatos y de que estos sean tomados en cuenta por la instancia resolutora, para que ésta, finalmente, dicte una resolución en la que dirima las cuestiones planteadas por las partes.

Atendiendo a lo anterior, y respecto a lo establecido por los artículos 7, fracción VII, en relación con el 111 de la Ley General, al ser deber de esta autoridad proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en la Norma Fundamental, especialmente el debido proceso, corresponde a esta instancia llevar a cabo el análisis integral de la tramitación del PRA, es decir, verificar que la substanciación del procedimiento se haya realizado conforme a las formas y tiempos previstos en la Ley General.

Bajo este contexto, de las constancias se advierte que el señalado como presunto responsable fue debidamente emplazado, ya que la autoridad substanciadora, al enterarse de que el mismo se encontraba privado de su libertad, (fojas 93 a 96) ordenó que la diligencia de emplazamiento se practicara en el lugar en que se encuentra privado de su libertad de manera preventiva, es decir, en las instalaciones del Centro de Readaptación Social Número Uno del Estado de Chihuahua.

Además, según consta en la cédula de notificación personal practicada el ocho de febrero de dos mil veintitrés (foja 97) al llamarse al PRA al presunto responsable, en la diligencia de emplazamiento se puso a su disposición copia certificada del expediente de investigación y sus anexos, el IPRA, las pruebas aportadas en el mismo, así como el acuerdo de admisión dictado por la autoridad substanciadora, documentos a través de los cuales se le hizo de conocimiento de manera detallada y precisa los hechos imputados y, además, se le hizo saber el derecho que le asiste de no declarar en contra de sí mismo, ni a declararse culpable; de defenderse personalmente o ser asistido por un defensor perito en la materia y que, de no contar con uno, le sería nombrado de oficio.

Luego, con la anticipación prevista en el artículo 208, fracción IV se citó a las demás partes para que concurrieran a la audiencia inicial, misma que fue celebrada también en las instalaciones del Centro de Readaptación Social Número Uno del Estado de Chihuahua, ante la presencia del servidor público señalado como presunto responsable quien en dicho acto nombró a su abogado defensor, y lo autorizó en los términos amplios del artículo 117 de la Ley General, señalando domicilio para que su defensor recibiera notificaciones en su nombre.

Según consta en el acta levantada durante la audiencia, en ese acto se le dio la oportunidad al señalado como presunto responsable de realizar las manifestaciones

que estimara necesarias para su defensa, así como de ofrecer pruebas. Las pruebas que obran en el expediente fueron admitidas y desahogadas en acuerdo del catorce de marzo de dos mil veintitrés y luego se declaró abierto el periodo de alegatos, actos que se notificaron personalmente al defensor del presunto responsable, aun y cuando estos no están señalados expresamente en el catálogo de notificaciones personales contenido en el artículo 193 de la Ley General.

Con todo lo anterior, se advierte que la autoridad substanciadora cumplió con su obligación de asumir una serie de responsabilidades particulares y tomar diversas iniciativas especiales para garantizar a los reclusos las condiciones necesarias para desarrollar una vida digna y contribuir al goce efectivo de aquellos derechos que bajo ninguna circunstancia pueden restringirse o de aquéllos cuya restricción no deriva necesariamente de la privación de libertad, ya que actuar en sentido contrario implicaría que la privación de libertad despoja a la persona de su titularidad respecto de todos sus derechos humanos, lo que no es posible aceptar.[1]

En esa misma tesitura, esta autoridad resolutora notificó personalmente al defensor del servidor público señalado como presunto responsable, el acuerdo mediante el cual se decretó el cierre de la instrucción y se turnaron los autos para dictar resolución, con lo que se tiene que el derecho al debido proceso y las formalidades esenciales del procedimiento fueron debidamente garantizadas en el PRA que en este acto se resuelve, con un carácter expansivo, al ampliar la tutela judicial del presunto responsable dado su posición especial de persona privada de la libertad.

TERCERO. - CASO CONCRETO

[1] Corte IDH. Caso "Instituto de Reeducación del Menor" Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, citado en Amparo en Revisión 1219/2016, foja 5.

EXPEDIENTE: 2023/OIC/PRA001

I. Hechos Atribuidos

En el IPRA que dio pie al inicio del PRA al rubro indicado, se atribuye al servidor público señalado como presunto responsable que el dieciocho de julio de dos mil veintidós, el C. JULIAN RICARDO LUJÁN LARA, encontrándose en el IMPE tomó un teléfono celular ajeno que había sido olvidado en la barra de la Coordinación Médica del IMPE por [redacted] y lo guardó en la bolsa izquierda de su pantalón.

II. Falta que se Imputa

Del IPRA, se advierte que la falta que se imputa al **C. JULIAN RICARDO LUJÁN LARA** es la prevista en el artículo 49, fracción I, de la Ley General al señalar que con los hechos atribuidos se transgredió la obligación que tienen los servidores públicos de cumplir con las atribuciones encomendadas, observando en su desempeño disciplina y respeto, tanto a los demás Servidores Públicos como a los particulares con los que llegare a tratar, en los términos que se establezcan en el código de ética a que se refiere el artículo 16 de la Ley General, estimando la autoridad investigadora que del Código de Ética, se incumplió con los principios de legalidad, honestidad, honradez y comportamiento digno.

CUARTO. – CAUDAL PROBATORIO

Precisado lo anterior, para estar en aptitud de realizar un estudio de fondo, lo procedente es determinar si con las constancias que integran el expediente, es posible tener por acreditada la existencia de la falta que se imputa y la responsabilidad de **JULIÁN RICARDO LUJÁN LARA**. En ese sentido, de manera previa se procederá a enunciar los medios de prueba ofrecidos por la autoridad investigadora para sustentar sus dichos, para luego valorarlos; destacándose que en la audiencia inicial el presunto responsable no ofreció prueba alguna de su parte.

EXPEDIENTE: 2023/OIC/PRA001

I. Pruebas de la autoridad investigadora.

En el expediente fueron admitidas y desahogadas las siguientes pruebas documentales ofrecidas por la autoridad Investigadora:

1. La documental pública, consistente en copia certificada del Formato Único de Trámites de fecha cinco de noviembre de dos mil catorce en el que se establece el alta del C. Julián Ricardo Lujan Lara, como Secretario de Departamento de la Coordinación de Protección Civil y el Honorable Cuerpo de Bomberos del Municipio de Chihuahua. (foja 33 y 34).

2. La documental pública, consistente en original del oficio sin número de fecha veinticinco de julio del año en curso signado por el Subdirector de Recursos Humanos de Oficialía Mayor en el que se informa incidencias de justificantes médicos/incapacidad médica con folio [redacted] por diagnostico Covid-19 del quince al veintiuno de julio del dos mil veintidós. (foja 28).

3. La documental privada consistente en denuncia de fecha veinte de julio de dos mil veintidós emitida por [redacted] Foja 1 y 2).

4. La documental pública, consistente en copia certificada de la bitácora de consulta externa de fecha dieciocho de julio del dos mil veintidós en donde se desprende que el [redacted] fue atendido en el área de Coordinación Medica. (foja13).

5. La documental pública, consistente en original del oficio número J-220-2022 de fecha veinticinco de julio del dos mil veintidós mediante el cual la Jefa del

Departamento Jurídico del Instituto Municipal de Pensiones señala que el dieciocho de julio de dos mil veintidós el C. Julián Ricardo Lujan Lara fue atendido minutos después de [redacted] (foja 10).

6. La documental pública consistente en copia certificada de la receta médica del C. Julián Ricardo Lujan Lara con número de folio [redacted] de fecha dieciocho de julio de dos mil veintidós (foja 24).

7. La documental pública consistente en copia certificada de un disco compacto, el cual contiene los videos de seguridad en los que se aprecia la atención de ventanilla de la Coordinación Médica del Instituto Municipal de Pensiones y de la farmacia del día dieciocho de julio de dos mil veintidós (Foja 11).

8. La documental pública consistente en copia certificada de la receta con número de folio [redacted] con nombre del paciente Julián Ricardo Lujan Lara, la cual corresponde a un medicamento controlado firmada la receta con los datos de dirección y teléfono manuscritos por el paciente. (foja 40)

9. La documental pública consistente en copia certificada del oficio de fecha veinticuatro de agosto del año en curso signado por el Jefe del Departamento de Planeación, (foja 43).

II. Valoración Probatoria

La Ley General establece en su artículo 130 que para conocer la verdad de los hechos la autoridad resolutora podrá valerse de cualquier persona o documento, sin más limitación que la de que las pruebas hayan sido obtenidas lícitamente y con

pleno respeto a los derechos humanos, estando únicamente excluida la confesional a cargo de las partes por absolución de posiciones.

Esa misma normativa señala que las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, mientras que los artículos 133, 134 y 165 de la Ley General disponen las reglas para la valoración de la prueba.

Por su parte, el artículo 138 y 141 de la Ley General dispone que no serán objeto de prueba: el derecho y los hechos notorios, pudiendo la autoridad que resuelva referirse a ellos aun cuando las partes no los hubieren mencionado.

Sobre esas premisas, se procede a valorar las pruebas y diligencias que obran en el expediente, en los términos siguientes:

Por lo que respecta a las documentales públicas identificadas en los numerales 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, se les reconoce valor pleno por lo que respecta a los hechos que en ellos se refieren en términos de lo previsto en los artículos 130, 131, 133, 158, 159, 207, fracción V, de la Ley General, por tratarse de documentos expedidos por servidores públicos en ejercicio de las facultades que las normas aplicables les otorgan y además no fueron controvertidas por otra prueba que tuviera el mismo valor probatorio.

En cuanto a la documental privada identificada con el numeral 3, de acuerdo a lo previsto en los artículos 130, 131, 134, 158, 159, 161, 207, fracción V, de la Ley General se le otorga valor probatorio pleno, ya que a juicio de esta Autoridad resulta fiable y coherente de acuerdo con la verdad conocida y la relación que guarda con

el resto de las documentales que integran el expediente de investigación, ya que no pasa desapercibido que fue a través de dicho instrumento –denuncia- que dio inicio la investigación de la falta administrativa que hoy se resuelve, de forma tal que genera convicción sobre la veracidad de los hechos plasmados en el mismo.

QUINTO.- ANÁLISIS DE LA RESPONSABILIDAD

Lo que corresponde es determinar si **JULIAN RICARDO LUJÁN LARA** es responsable de la comisión de la conducta que se le imputa, por lo que se procederá a verificar si los hechos que se le atribuyen pueden subsumirse a la hipótesis normativa que se considera infringida.

En la especie, la conducta imputada es de acción, al señalarse que **JULIAN RICARDO LUJÁN LARA**, el día dieciocho de julio de dos mil veintidós se apoderó de un teléfono celular olvidado por el [redacted] en la barra de la Coordinación Médica del IMPE, lo cual resulta contrario a la obligación contenida en el artículo 49, fracción I de la Ley General[2].

Ahora bien, en aras de cumplir con el principio de tipicidad aplicable al derecho administrativo sancionador[3], de la norma jurídica que se estima fue violentada, se advierten los siguientes elementos: a) la existencia de un acto u omisión contrario a

---

[2] Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:
I. Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su desempeño disciplina y respeto, tanto a los demás Servidores Públicos como a los particulares con los que llegare a tratar, en los términos que se establezcan en el código de ética a que se refiere el artículo 16 de esta Ley;
...

[3] Tesis: P./J. 100/2006 de rubro: TIPICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMENTE REFERIDO A LA MATERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS, con registro digital 174326.

las obligaciones asignadas a los servidores públicos b) Que dicho acto u omisión sea cometido por un servidor público con motivo de las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas c) que con su acto u omisión se deje de observar la disciplina y respeto que establecen los códigos de ética de los entes públicos d) que el acto u omisión se dirija hacia los demás servidores públicos o los particulares.

Bajo ese contexto, en primer término, se debe determinar si el **C. JULIÁN RICARDO LUJAN LARA** tenia, al momento de la realización de los hechos que se le imputan el carácter de servidor público.

Al respecto, la autoridad investigadora acreditó con la documental pública consistente en copia certificada del Formato Único de Trámites de fecha cinco de noviembre de dos mil catorce, visible a fojas 33 y 34 e identificada en el apartado cuarto del presente capítulo de consideraciones, con el numeral I.1, que a la fecha de los hechos fungía como Secretario de Departamento de la Coordinación de Protección Civil y el Honorable Cuerpo de Bomberos del Municipio de Chihuahua.

Además, del contenido de las constancias del expediente que se resuelve se advierte que el veinticinco de julio de dos mi veintidós el Subdirector de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor informó a la autoridad investigadora que a esa fecha **JULIÁN RICARDO LUJAN LARA** se encontraba activo como servidor público, con lo que se comprueba que el señalado como presunto responsable era servidor público del municipio al momento de los hechos imputados, por lo que es sujeto de la Ley General en términos de lo dispuesto en los artículos 108, párrafo cuarto de la Constitución Federal, 178, párrafo primero de la Constitución Política del Estado de Chihuahua y 4 de la Ley General.

Ahora bien, de las constancias que conforman el expediente que hoy se resuelve, esta autoridad resolutora estima que con los hechos atribuidos al presunto responsable, si se incumplió la obligación contenida en el artículo 49, fracción I de la Ley General y por tanto se actualizan los elementos de la falta que se imputa, por las consideraciones lógico jurídicas que se exponen a continuación:

I. Se tiene acreditado el elemento relativo a la existencia de un acto contrario a las obligaciones asignadas a los servidores públicos

La conducta que se le atribuye al **C. JULIAN RICARDO LUJÁN LARA** es el haberse apoderado de un teléfono celular olvidado por el [redacted] en la barra de la Coordinación Médica del IMPE, privando, por ende, a [redacted] de la posesión de un bien, la cual retuvo a pesar de tener conocimiento de dicha ajenidad.

Para acreditar dicha conducta, la autoridad investigadora aportó los medios de convicción descritos en el apartado cuarto de este capítulo de consideraciones, por lo que corresponde analizar dichas pruebas para verificar que con las mismas se acrediten las circunstancias de tiempo, modo y lugar relativas a la conducta imputada a **JULIÁN RICARDO LUJÁN LARA**.

Al respecto, en el expediente obra, entre otras pruebas, la documental pública consistente en copia certificada del disco compacto que contiene tres videos de

seguridad, denominados "1(uno) coord med 18 (dieciocho) julio 2022 (dos mil veintidós)", "2 (dos) toma signos 18 (dieciocho) julio 2022 (dos mil veintidós)" y " 3 (tres) farmacia 18 (dieciocho) julio 2022 (dos mil veintidós)", mismos que derivado del acuerdo de fecha catorce de marzo de dos mil veintitrés (foja 125 ciento veinticinco) fueron inspeccionados por la autoridad substanciadora el día diecisiete de marzo de dos mil veintitrés.

En esa tesitura, se levantó acta circunstanciada que obra a partir de la foja 127 (ciento veintisiete) en la que mediante diversas capturas de pantalla se narran los hechos que se aprecian en los videos que contiene la documental pública ofrecida por la autoridad investigadora, por lo que esta autoridad resolutora se dio a la tarea de verificar de forma integral el contenido del acta circunstanciada levantada, en conjunto con las documentales ofrecidas como probanza por la autoridad investigadora, así como lo evidenciado en el resto de las constancias que obran en autos del expediente, de lo que se desprenden las siguientes conclusiones:

- Al adminicular la credencial de elector que obra a fojas dos del expediente, con la cual el [redacted] se identificó al presentar su denuncia, con el contenido de los videos "1(uno) coord med 18 (dieciocho) julio 2022 (dos mil veintidós)", y "2 (dos) toma signos 18 (dieciocho) julio 2022 (dos mil veintidós)" se acredita que quien dejó en la ventanilla de atención del IMPE un teléfono celular fue el [redacted]

- Del contenido de los videos "1(uno) coord med 18 (dieciocho) julio 2022 (dos mil veintidós)", y "2 (dos) toma signos 18 (dieciocho) julio 2022 (dos mil veintidós)" se aprecia que la persona que fue atendida en la ventanilla de

atención del IMPE después de [redacted] quien se posesionó del teléfono celular.

- A efecto de crear la convicción de que la identidad de la persona que siguió en el turno a [redacted] es el señalado como presunto responsable, es decir, el C. JULIAN RICARDO LUJÁN LARA se cuenta con la documental pública consistente en el oficio firmado por la Jefa del Departamento Jurídico del IMPE, en el que hace constar que la persona que fue atendida posteriormente a [redacted] en el área de Coordinación Médica fue Julián Ricardo Luján Lara, quien acude para la reimpresión de recetas extraviadas para el surtimiento de medicamento mensual.

- En este mismo punto, relativo a la identidad de la persona que toma el celular, se crea en esta autoridad resolutora la convicción de que el señalado como presunto responsable es la persona de sexo masculino que aparece en los videos con cubrebocas, vestido con bermuda color mostaza, playera a rayas y gorra con la imagen de un gallo, derivado a que las recetas con los folios que se indican a continuación corresponden al paciente JULIAN RICARDO LUJÁN LARA con número de afiliación [redacted]

Folio	Hora de impresión	Fojas
[redacted]	13:25:54	19 y 25
[redacted]	13:26:10	20 y 23
[redacted]	13:25:38	24 y 40

Además, esta última cuenta con datos personales del señalado como presunto responsable, alusivos a su dirección y número telefónico, que fueron incluidos

por él mismo, derivado de las disposiciones sanitarias aplicables al tipo de medicamento que se entregó al titular de la receta, aunado a que en la foja cuarenta y tres del expediente el Jefe del Departamento de Planeación del IMPE hizo constar que al momento de la entrega del medicamento que amparaba dicha receta, se verificó la fotografía que obra en el sistema del IMPE con el de la persona que acudió a su surtimiento, siendo el C. JULIÁN RICARDO LUJÁN LARA.

- A fojas 117 (ciento diecisiete) del expediente se advierte que durante el desarrollo de la audiencia inicial el C. JULIAN RICARDO LUJÁN LARA reconoció haber tomado el teléfono celular, esto después de haber habérsele informado acerca de su derecho a no declarar en contra de si mismo ni a declararse culpable, y en ese mismo acto, señaló que lo tenía en su casa y que lo iba a regresar, lo que aconteció el día diecisiete de abril, fecha en que mediante cédula de notificación se hizo constar que el [redacted] en su carácter de autorizado en amplios términos del artículo 117 de la Ley General, hizo entrega a nombre del presunto responsable de un teléfono celular.

En tales condiciones, al concatenar los hechos consistentes en la declaración vertida en audiencia, la posterior entrega de teléfono celular, con las manifestaciones de las autoridades del IMPE, es suficiente para acreditar que la identidad de la persona que aparece en los videos tomando el teléfono celular sin el consentimiento de quien podía otorgarlo, corresponde a JULIÁN RICARDO LUJÁN LARA, por lo que el elemento relativo a la conducta que se le atribuye se tiene por acreditado.

narrativa del oficio J-220-2022 signado por la titular del Departamento Jurídico del IMPE, así como con las recetas reseñadas en el apartado anterior, se crea la convicción para esta autoridad resolutora de que el día de los hechos JULIAN RICARDO LUJÁN LARA se encontraba haciendo uso del servicio médico del IMPE, como parte de las atribuciones que le correspondían al ser trabajador del municipio de Chihuahua

En ese sentido, es evidente que la conducta imputada a JULIAN RICARDO LUJÁN LARA fue cometida en el ejercicio de su atribución consistente en acceder al servicio médico que presta el IMPE, por lo que dicho elemento se tiene por acreditado.

III. **Se acredita que con el acto se dejaron de observar la disciplina y respeto en los términos del Códigos de ética**

El acto imputado al C. JULIAN RICARDO LUJÁN LARA, cuya comisión se acreditó en el numeral I de este apartado[4], implica el incumplimiento a su obligación como servidor público de observar disciplina y respeto en los términos del Código de Ética.

Lo anterior se afirma, ya que todo servidor público se encuentra obligado a ejercer las atribuciones que tiene encomendadas, con disciplina y respeto; entendida la primera, conforme al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, como la obligación de observar las leyes y ordenamientos de la profesión o instituto, y el segundo, viene del latín *respectus* que significa 'atención' o 'consideración' y puede definirse como la consideración y valoración especial que se le tiene a alguien o a algo,

[4] QUINTO.- ANÁLISIS DE LA RESPONSABILIDAD

al que se le reconoce valor social o especial deferencia. El respeto como valor significa preocuparse por el impacto de nuestras acciones en los demás.

El respeto constituye una de las reglas mínimas de comportamiento a las que se encuentra obligado todo servidor público en el ejercicio de las atribuciones que le son conferidas con motivo de su empleo, cargo o comisión. Si se traslada la premisa anterior al presente caso, se obtiene que, para que se acredite la infracción que se le imputa al servidor público involucrado, se debe comprobar que con su conducta dejó de tratar con deferencia y consideración a las personas con las que se relaciona con motivo de su trabajo y de las atribuciones que tiene conferidas.

En lo que aquí interesa, el hecho de tomar un objeto sin contar con el consentimiento de quien ostenta su propiedad o posesión, representa una falta de respeto, puesto que resulta contrario a la consideración y deferencia que se deben a otras personas por el simple hecho de serlas. Esta afirmación se vincula con los principios que rigen el servicio público, establecidos en el artículo 7, fracción II, de la Ley General, puesto que, en específico, los servidores públicos deben conducirse en todo tiempo con rectitud.

Así, el que JULIAN RICARDO LUJÁN LARA haya tomado una cosa que no le pertenece, violenta los derechos de la otra persona, al romper la seguridad y confianza de dejar cualquier cosa ya sea de su propiedad o bajo su resguardo, en su lugar de trabajo, o bien, en el espacio en el que se encuentre, ya que el respeto constituye una de las reglas mínimas de comportamiento a las que se encuentra obligado todo servidor público en el ejercicio de las atribuciones con que cuenta con motivo de su empleo, cargo o comisión.

veintidós de abril de dos mil veintidós, vigentes al momento de los hechos que se imputan a JULIAN RICARDO LUJÁN LARA.

Con el contenido de esta disposición, se cumple con el elemento de la definición anteriormente dada relativo a que las facultades que le corresponde a las partes de una organización deben *estar ordenadas en las normas*, resultando aplicable también en la especie la Ley del Instituto Municipal de Pensiones, ordenamiento que tiene por objeto regular las prestaciones de seguridad social de los trabajadores al servicio del Municipio de Chihuahua, los Organismos Municipales Descentralizados, así como las del propio Instituto.

Por su parte, el artículo 3 de la Ley del Instituto Municipal de Pensiones divide las prestaciones de seguridad social que se otorgan, en principales y accesorias, encontrándose el servicio médico entre las prestaciones principales.

No pasa desapercibido para esta autoridad resolutora que al momento de los hechos JULIAN RICARDO LUJÁN LARA se encontraba incapacitado; sin embargo, ello no resulta óbice para afirmar que la conducta se cometió en el ejercicio de sus atribuciones, pues de acuerdo al artículo 45 de la Ley del Instituto Municipal de Pensiones, es precisamente un derecho de los derechohabientes que se les concedan las incapacidades que procedan, previa expedición del certificado correspondiente, siendo que en el caso concreto obra a foja veintiuno del expediente un certificado de incapacidad con número de folio [redacted] por tanto se tienen por acreditados los requisitos de ley para la expedición de ésta.

Con las pruebas ofrecidas por la autoridad investigadora, consistentes en los tres videos que contiene el disco compacto que se acompañó al IPRA (foja once), la

Por lo que toca a la cuestión jurídica respecto a si está justificada o no su acción, es decir, si dicha conducta fue contraria a las obligaciones asignadas a los servidores públicos y por ende si ésta implicó una falta administrativa, será objeto de análisis en el numeral III de este apartado.

II. Se tiene acreditado el elemento relativo a que dicho acto fue cometido con motivo de las atribuciones encomendadas al servidor público

Lo anterior se afirma ya que la conducta de acción que se imputa al C. JULIAN RICARDO LUJÁN LARA fue consumada cuando dicho servidor público hacia uso del servicio médico brindado por el IMPE, pues como ya ha quedado de manifiesto se apoderó del teléfono celular durante su comparecencia al área de ventanilla de la Coordinación médica mientras en dicha área procedían a la reimpresión de recetas extraviadas para el surtimiento de medicamento mensual.

En ese sentido, se estima necesario en primer término definir el vocablo *atribución,* el que de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española, significa "Cada una de las **facultades** o poderes que corresponden a cada parte de una organización pública o privada, según las normas que las ordenen"

En el caso concreto, ya ha quedado acreditado que JULIAN RICARDO LUJÁN LARA, al momento de consumarse los hechos que se le imputan formaba parte del Municipio, es decir, estaba dado de alta como trabajador de éste, adscrito a la Dirección de Seguridad Pública y con tal carácter tenía derecho a gozar del servicio médico que se otorga a través del IMPE, lo anterior, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 120, inciso i) de las Condiciones Generales entre el Municipio de Chihuahua y los Trabajadores a su Servicio año 2022, publicadas en la Gaceta municipal el día

Por ello, la conducta desplegada no corresponde con los estándares que deben prevalecer en el comportamiento de los servidores públicos, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7, fracción II, de la Ley General, así como al contenido del Código de Ética, violentándose con ello, tal como lo afirmó la autoridad investigadora los principios de legalidad, honestidad, honradez y comportamiento digno.

Lo anterior se afirma, ya que con la conducta atribuida a JULIAN RICARDO LUJÁN LARA, consistente en haberse apoderado de un teléfono celular durante su comparecencia al área de ventanilla de la Coordinación médica del IMPE, se violentó el principio de legalidad contemplado en el artículo 4, fracción I, inciso a) del Código de Ética, ya que con su actuar fue omiso en respetar el estado de derecho y dejó de cumplir con las normas jurídicas que conducen su actuar como servidor público, reguladas desde el artículo 109, fracción III de la Constitución Federal[5], así como en los artículos 6 y 7 de la Ley General[6] que obligan, por un lado a los entes públicos a mantener las condiciones estructurales y normativas que permitan la actuación ética y responsable de cada servidor público y, a los servidores públicos a observar diversos principios en el ejercicio del servicio público, entre los que se encuentra el relativo a la honradez.

---

[5] Artículo 109. Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente:
III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones

[6] Artículo 6. Todos los entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética y responsable de cada servidor público.
Artículo 7. Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público.

Por su parte, el Código de Ética, define el principio constitucional de honradez como la obligación para actuar con rectitud, integridad y respeto a la normatividad, el cual fue violentado al tomar un objeto sin contar con el consentimiento de quien ostenta su propiedad o posesión, pues como ya quedó de manifiesto al analizar el principio de legalidad, su actuar no es compatible con la normativa que regula el desempeño de los servidores públicos y tampoco obró con rectitud, entendida esta como la cualidad de una persona que es severa consigo y con los demás en el cumplimiento de normas morales y de conducta, tal como lo es el Código de Ética cuyo objeto es precisamente fomentar una cultura de principios y valores en el quehacer gubernamental, a través de normas que regulen el comportamiento de las personas servidoras públicas del Municipio.

En cuanto al principio constitucional de honestidad, el Código de Ética lo traduce en la obligación para las personas servidoras públicas de conducirse con rectitud según la ética profesional y con apego a la verdad, fomentando la cultura de confianza, la cual fue trastocada por JULIAN RICARDO LUJÁN LARA, al haber tomado un bien que no era de su propiedad mientras gozaba de su acceso al servicio médico en el IMPE.

Además, el Código de Ética, dispone cuál es la conducta esperada de los servidores públicos, entre la que se encuentra la relativa a un comportamiento digno, honrado, responsable, serio y respetuoso, en relación no solo con la ciudadanía, sino con las personas servidoras públicas con las que interactúan con motivo de sus atribuciones, debiendo observar buena conducta y trato respetuoso, el que fue violentado al apoderarse de un teléfono celular que no era de su propiedad, conducta que implicó el dejar de tratar con deferencia y consideración a la persona

EXPEDIENTE: 2023/OIC/PRA001

que olvidó en ventanilla su teléfono celular, dejando de preocuparse por el impacto que tuvo su acción hacia los demás.

Derivado de lo anterior, y al haberse tenido por acreditado el elemento relativo a la conducta que se le atribuye a JULIAN RICARDO LUJÁN LARA en el numeral I, consecuentemente se actualiza el elemento relativo al incumplimiento de su obligación consistente en observar la disciplina y respeto en los términos del Códigos de Ética.

IV. Se acredita que el acto cometido fue dirigido hacia un particular

Lo que corresponde razonar en este numeral es determinar a quién fue dirigida la conducta desplegada por JULIAN RICARDO LUJÁN LARA.

En primer término, se debe señalar que, tal como se describió en el numeral I, al haber analizado los videos "1(uno) coord med 18 (dieciocho) julio 2022 (dos mil veintidós)", y "2 (dos) toma signos 18 (dieciocho) julio 2022 (dos mil veintidós)", así como la credencial para votar con fotografía que obra en el expediente a fojas dos, se tiene por acreditado que el celular del cual se posesionó JULIAN RICARDO LUJÁN LARA, fue olvidado por el [redacted] en la barra de la Coordinación Médica del IMPE.

En ese sentido, corresponde determinar el carácter del [redacted] al IMPE a consulta con número [redacted] el día dieciocho de julio de dos mil veintidós, a las once horas con treinta y cuatro minutos, tal como se acredita con la documental que obra a fojas trece. Derivado de dicha consulta, se le expidieron dos recetas, con números de folio [redacted] y [redacted] en las que se aprecia el nombre del paciente y en el rubro "Dependencia" y "Tipo de empleado"

contienen la leyenda "Pensionados y Jubilados"; luego, de los videos se desprende su presencia en la ventanilla de atención de la Coordinación Médica del IMPE y posteriormente en la farmacia del mismo, en donde se aprecia que le son entregados medicamentos a las trece horas con once minutos.

En ese sentido, si bien es cierto el [redacted] tiene el carácter de derechohabiente del IMPE, en los términos del artículo 4, fracción I de la Ley del Instituto Municipal de Pensiones, al tener el carácter de jubilado o pensionado no cuenta con el carácter de servidor público en los términos de la Ley General, ya que esta los define en el artículo 3, fracción XXV como aquellas personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los entes públicos, en el ámbito federal y local, conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Federal, precepto que a su vez remite a las constituciones locales.

El artículo 178 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua define como servidores públicos a todos los funcionarios y empleados de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado, de los Organismos Autónomos, de los Municipios, de las entidades paraestatales y, en general, a toda persona que desempeñe en las entidades mencionadas un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, ya sea que su designación tenga origen en un proceso de elección popular, en un nombramiento o en un contrato.

Bajo este contexto, quienes tienen el carácter de jubilados o pensionados del municipio de Chihuahua, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución local no pueden ser considerados servidores públicos, pues éstos ya no están sujetos a una relación laboral con el municipio. Lo anterior se afirma ya que del artículo 11 de las Condiciones Generales entre el Municipio de Chihuahua y los Trabajadores a su

EXPEDIENTE: 2023/OIC/PRA001

Servicio se advierte que la misma divide a los trabajadores en tres clasificaciones: a) de base, b) de confianza y c) eventuales, sin que ninguna de dichas categorías abarque a quienes tienen el carácter de jubilados o pensionados.

De lo anterior, se tiene que la conducta de JULIAN RICARDO LUJÁN LARA, consistente en apoderarse de un teléfono celular en el ejercicio de su derecho a gozar del servicio médico del IMPE, a través de la cual dejó de observar disciplina y respeto en los términos del Código de Ética fue dirigida a un particular, en este caso, el denunciante, [redacted] mientras este se encontraba ejerciendo su derecho al servicio médico-asistencial como jubilado/pensionado del municipio de Chihuahua.

Bajo este contexto, una vez que fueron descritas y valoradas las pruebas admitidas, en conjunto con lo evidenciado del resto de las constancias que obran en autos del expediente, así como de los argumentos vertidos por las partes, es posible para esta autoridad concluir que fue probado más allá de toda duda razonable la comisión de la falta administrativa imputada a **JULIAN RICARDO LUJÁN LARA**, al haberse acreditado cada uno de los elementos de la misma, por lo que lo conducente es individualizar la sanción que se aplicará.

SEXTO.- Individualización de la sanción.

I.Elementos a tomarse en cuenta

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley General, para la imposición de las sanciones a que se refiere el artículo 75 de la misma normativa, se deben considerar los elementos siguientes:

EXPEDIENTE: 2023/OIC/PRA001

1. Cargo desempeñado, nivel jerárquico, antecedentes y antigüedad y en el servicio público. Del oficio identificado a fojas veintiocho de fecha veinticinco de julio de dos mil veintidós, emitido por el Subdirector de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del municipio de Chihuahua, así como de la copia certificada del Formato Único para Trámites de Personal a nombre de JULIAN RICARDO LUJAN LARA se tiene que al dieciocho de julio de dos mil veintidós, fecha en que se actualizó la conducta, JULIAN RICARDO LUJÁN LARA se encontraba adscrito a la Dirección de Seguridad Pública y contaba con una antigüedad en el municipio de ocho años un mes y dieciocho días, al haber ingresado el primero de mayo de dos mil catorce.

   En virtud del cargo que ostentaba, la corporación a la cual pertenecía, así como de su experiencia, válidamente se puede concluir que el infractor estaba en aptitud de conocer los alcances de sus facultades, atribuciones y funciones, por lo que no desconocía que no debía tomar algún bien que no fuera de su propiedad sólo por el hecho de que se encontrara desatendido, pues ello no era indicativo que estuviera ahí para ser tomado por cualquier persona.

2. Condiciones exteriores y los medios de ejecución. De conformidad con las constancias de autos, se aprecia que al momento de la ejecución de la conducta, JULIÁN RICARDO LUJÁN LARA se encontraba consciente de que el teléfono celular no le pertenecía, ya que en el video denominado "1(uno) coord med 18 (dieciocho) julio 2022 (dos mil veintidós)", se aprecia que a las trece horas con nueve minutos y treinta segundos es que se da cuenta de la presencia del celular, lo toca pero no se posesiona de el hasta que estuvo en aptitud de guardar el propio en el bolsillo izquierdo de su bermuda y pasados

tres minutos, a las trece horas con trece minutos y ocho segundos, revisando la pantalla como lo realiza quien es propietario de un dispositivo y observando a las personas a su alrededor, colocó el ajeno en el bolsillo derecho de su bermuda.

Como condición exterior, de autos se desprende que por conducto de su abogado defensor hizo entrega de un teléfono celular, con la intención de que este fuera entregado a [redacted] en su carácter de denunciante en el PRA materia de estudio.

3. Reincidencia. De los registros que obran en el OIC, se advierte que la parte señalada como presunto responsable no había sido sancionado anteriormente por parte del OIC, por lo que no se considera a JULIAN RICARDO LUJÁN LARA como reincidente.

Además, si bien es cierto de acuerdo al IPRA y al acuerdo de calificación de la conducta, ésta se tuvo como no grave, para efectos de estar en aptitud de individualizar la sanción que se aplicará de acuerdo al catálogo del artículo 75 de la Ley General, para que la sanción sea pertinente, justa, proporcional y no excesiva, se debe también considerar el elemento objetivo consistente en la gravedad de la conducta *per se,* lo que en la especie se estima como grave pues el actuar de JULIÁN RICARDO LUJÁN LARA, no solo implica una infracción de carácter administrativo, sino que a su vez configura un hecho ilícito sancionable en los términos de la legislación penal aplicable, lo cual sin duda transgrede los principios que deben ser observados por los servidores públicos.

EXPEDIENTE: 2023/OIC/PRA001

II. Sanción a imponer

En mérito de las consideraciones que anteceden y atendiendo a la necesidad de suprimir este tipo de conductas que, sin duda alguna, infringen el deber que se impone a los servidores públicos del municipio de Chihuahua de actuar en todo momento apegándose a los principios que rigen el servicio público de legalidad, honestidad, honradez, lealtad y al respeto que debe prevalecer en todo momento hacia las personas y a las pertenencias de las mismas, así como la finalidad de las sanciones, que es la de disuadir la posible comisión de faltas similares en el futuro, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 7, 49, fracción I, 75, fracción IV, último párrafo de este mismo artículo y 76 de la Ley General, en uso de la facultad discrecional otorgada a esta autoridad resolutora para individualizar la sanción administrativa, y habiendo tomado en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la falta cometida se debe imponer al infractor la sanción consistente en inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por el plazo de un año.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se:

R E S U E L V E

PRIMERO. Es existente la infracción objeto del presente PRA y se tiene por acreditada la responsabilidad de JULIÁN RICARDO LUJÁN LARA.

SEGUNDO. Se impone a JULIÁN RICARDO LUJÁN LARA la sanción consistente en inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por el plazo de un año.

EXPEDIENTE: 2023/OIC/PRA001

TERCERO. Se ordena registrar la presente resolución en el Registro de Servidores Públicos Sancionados del OIC, así como dar vista de la misma a la Subdirección de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor para que de conformidad con la normatividad aplicable en la materia determine lo que en derecho corresponda e informe a esta autoridad la determinación que adopte en el plazo de cinco días hábiles posteriores a que ello ocurra.

CUARTO.- Notifíquese a las partes en términos de ley.

Así lo resolvió y firma, el Licenciado Esaú Sánchez Pedroza, Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control del Municipio de Chihuahua, en su calidad de autoridad resolutora.